Tercera parte

México en la mira

México en el desfiladero: profundización del subdesarrollo bajo el modelo neoliberal

Humberto Márquez Covarrubias, Darcy Victor Tetreault,
Roberto Soto Esquivel, Edgar Zayago Lau

Introducción

El neoliberalismo es una teoría y una ideología que propugna por el libre mercado y la libertad individual como requisitos para alcanzar el crecimiento económico y el bienestar social (Harvey, 2007). A la gestión del Estado interventor se le atribuye el papel de principal obstáculo para la actividad empresarial, a la sazón el principal agente de desarrollo. Desde esa óptica, el buen gobierno y la buena política deviene de las prescripciones del Consenso de Washington y los programas de ajuste estructural propuestos por instancias como el Foro Económico Mundial (FEM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).[1]

No obstante, el modelo neoliberal tiene el cometido no explícito de concentrar capital, poder y riqueza entre una delgada élite social. En los países periféricos y subdesarrollados, como México, la implantación del modelo, que cuenta con la complacencia gubernamental, requirió de la activación de tres movimientos simultáneos: 1) la destrucción del modelo de desarrollo nacional previo (por ejemplo, industrialización por sustitución de importaciones y el desmantelamiento del Estado benefactor); 2) la reinserción subordinada a la economía mundial, al amparo de "tratados de libre comercio" y apertura a la inversión extranjera directa (IED); y 3) la superexplotación de las principales fuentes de la riqueza social, la naturaleza y la fuerza de trabajo.

[1] Algo semejante puede decirse del Posconsenso de Washington, pues no cuestiona los principios básicos del neoliberalismo (liberalización, privatización y desregulación), pero admite la intervención del Estado en aspectos como la formación de capital humano entre los extremadamente pobres y enfatiza la necesidad de controlar el ritmo y la secuencia de las reformas estructurales.

El proceso de neoliberalización significa la apertura de espacios de valorización, por parte del Estado, en beneficio del gran capital, que busca generar y apropiarse de nuevas fuentes de riqueza, incluyendo áreas que otrora estaban reservadas, como bienes comunes (por ejemplo, aguas, tierras comunes, bosques y otras formas de biodiversidad) y bienes de la nación (por ejemplo, empresas públicas, infraestructura, recursos del subsuelo, mar y espacio aéreo), y la extensión de la frontera de explotación a prácticamente toda los ámbitos de la naturaleza (biósfera, litósfera y estratósfera), además del control estratégico del trabajo científico-tecnológico. Los incipientes procesos de democratización pronto dieron un viraje hacia la derechización política para sustentar el desmantelamiento del Estado benefactor y garantizar la procreación de un "clima favorable a los negocios". En tanto que las desigualdades sociales y, en particular, la abundancia de trabajo barato se conciben como un inmejorable factor de atracción de la inversión privada. Es decir, el modelo neoliberal está centrado en la maximización de las ganancias sin reparos en los costos sociales y ambientales.

Este capítulo tiene el objetivo de analizar el momento crítico que vive México derivado de la implementación del modelo neoliberal. Nuestro argumento es que la neoliberalización representa la monopolización y extranjerización de la economía nacional, el sometimiento y dependencia ante Estados Unidos y la consecuente pérdida de soberanía nacional (política, laboral, energética, financiera, fiscal y monetaria), la derechización del poder y de sistema político, el incremento de la desigualdad y la pobreza, la devastación del medio ambiente y la irrupción violenta de una de las industrias ilícitas embebidas de riqueza: el narcotráfico. En tal sentido, la persistencia del neoliberalismo está profundizando, a pasos agigantados, el subdesarrollo.

Neoliberalización: monopolización y maximización de riqueza

México es un país que históricamente ha estado inmerso en el subdesarrollo y la dependencia. Pero las últimas tres décadas, bajo el modelo neoliberal, se han significado por una profundización de las desigualdades sociales al interior del país y el ensanchamiento de las asimetrías frente a los otros países que componen el bloque económico de América del Norte. Desde las entrañas mismas del sistema de poder, desde arriba, las élites adoptaron sumisamente los dictados del Consenso de Washington que exigían, para superar la llamada crisis de la deuda, la aplicación de las políticas de ajuste estructural, representadas por la triada: liberalización, desregulación y privatización, según las prescripciones del FMI y el BM (Guillén, 1997).

Este modelo es de una simiente teórica y política de carácter antipopular y contrarrevolucionaria, porque de manera deliberada vulnera el Estado social o benefactor y su red de protección, a fin de abarcar todos los confines socioeconómicos posibles para mercantilizar los bienes de la nación y los bienes comunes, además de apropiarse de sectores estratégicos y empresas rentables, públicas y privadas, mediante los programas de privatización y las estrategias corporativas de adquisiciones y fusiones. En este transe, poco importa que la calidad de vida de la mayoría de la población se desplome hasta niveles inhumanos y que las relaciones sociales se perviertan en una espiral de degradación social. En esa tesitura, el modo de vida campesino se considera anacrónico e improductivo, con la finalidad de mercantilizar los bienes comunes, como las tierras ejidales, el agua y la biodiversidad. El salario del proletariado se contiene como supuesta política antinflacionaria, para redituar mayores dividendos a los empleadores y atraer más inversión privada. El Estado se considera obeso e ineficiente con tal de apropiarse de empresas estatales saneadas, estratégicas y rentables (como bancos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, autopistas, etcétera). El progresivo desmantelamiento de los puntales de la institucionalidad nacional-revolucionaria también alcanza la red de protección social, como el deterioro inducido del sistema de seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS– e Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado –ISSSTE–), el deterioro del sistema educativo nacional, controlado por un sindicato dirigido de manera corrupta y oportunista (el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –SNTE–). La pretensión de privatizar la renta petrolera ha permitido una penetración silenciosa de la inversión privada en Petróleos Mexicanos (PEMEX), manantial de recursos para la hacienda pública. Con todo, una delgada élite económica y política, del país y del extranjero, afiliada al sistema de poder resulta la principal beneficiaria de esta estrategia neoliberal de acumulación progresiva basada en el despojo, una verdadera reedición de lo que Marx denominara acumulación originaria.

Bajo el modelo neoliberal se impone un régimen económico que discursivamente aboga por la competencia y la libre empresa, pero que en la realidad está dominado por un puñado de empresas monopólicas y oligopólicas. Por ejemplo, la banca comercial está controlada por cuatro bancos extranjeros: Banamex (Citigroup), Bancomer (BBVA), HSBC y Santander; estos bancos incurren en prácticas financieras especulativas y cobran altas comisiones, amén de que prácticamente no otorgan crédito al público y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPymes). Los grandes bancos han acumulado inconmensurables ganancias, al punto de que aun durante la crisis, algunos de ellos pu-

dieron solventar las pérdidas de sus casas matrices, como sucedió con Bancomer (México) y BBVA (España). Los medios de comunicación masiva están concentrados por las televisoras Televisa y TV Azteca que, además de acaparar las concesiones de televisión abierta, constituyen el principal instrumento del poder para manipular la información y colonizar la conciencia colectiva. Los servicios telefónicos están controlados por Telmex, que fuera empresa estatal antes de caer en manos de Carlos Slim y convertirlo en uno de los hombres más ricos del orbe. En tanto que el comercio minorista ha sido entregado a corporaciones extranjeras como Walmart y Cosco, que destruyen al pequeño comercio y el comercio autóctono, desmantelan cadenas productivas –pues venden a "bajos precios" mercaderías importadas– e imponen regímenes laborales inseguros y precarios. Otro tanto ocurre con el cemento, medicamentos y demás productos y servicios.

Los productos de consumo básico son controlados por unas cuantas empresas: los productos lácteos por Lala; el pan industrializado por Bimbo; el huevo por Bachoco; el pollo por Tayson y Bachoco; alimentos procesados por Nestlé; bebidas por Coca-cola, Pepsico, Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma; las harinas de maíz por Maseca. El sector agroalimentario está dominado por corporaciones extranjeras, como Monsanto. En ese contexto, la canasta básica familiar se ha venido encareciendo, merced a la contención de los salarios y al deterioro de su poder adquisitivo. Paradójicamente, mientras que han venido arrasando con la economía social productora de alimentos, los monopolios y oligopolios acrecientan su capacidad de producción, pero se enfrentan a un mercado de consumo deprimido.

En el sector energético, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) representan monopolios estatales, cuya peculiaridad es que la energía es un bien de la nación y un recurso estratégico para el desarrollo, pero subrepticiamente ha sido socavada mediante convenios con el sector privado, sin necesidad de privatizarlas formalmente. Además de que sus finanzas son agredidas continuamente por actos de corrupción institucional y por estrategias de administración gerencial que concibe a la empresa pública como una de tipo privada.

Además de monopolización de la economía nacional, la neoliberalización también significa la pérdida de la soberanía nacional, que se traduce en una exacerbada dependencia frente a Estados Unidos, país que ha ejercido por un periodo de ocho décadas continuas el papel dominante (quien sustenta la hegemonía) del sistema capitalista mundial, papel que hoy se encuentra en entredicho ante el surgimiento de nuevas potencias, como China. Bajo el esquema de integración asimétrica y excluyente al bloque de América del Norte,

con instrumentos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México ha volcado su comercio exterior hacia su vecino del norte en 85 por ciento, en tanto que los flujos de IED provienen en una proporción de dos tercios de ese país. En el ámbito laboral, Estados Unidos representa el principal polo de atracción: alrededor de 30 millones de personas de origen mexicano viven en aquel país y unos 450 000 emigran anualmente; en conjunto envían cada año un promedio de 20 000 millones de dólares (BANXICO, 2009) como remesas salariales para sus dependientes económicos, lo cual representa en términos macroeconómicos la tercer fuente de divisas, después la manufactura y el petróleo. No obstante que el petróleo es la segunda fuente de divisas, México ha incrementado la importación de derivados del petróleo –gasolina, diesel y gas licuado– de ese país por más de 13 000 millones de dólares. De ese país también se importan alrededor de 40 por ciento de los alimentos, como granos, oleaginosas y lácteos. La sumisión y dependencia hacia Estados Unidos también abarca otros capítulos, como el político, diplomático, cultural y tecnológico.

El modelo neoliberal abre una nueva etapa de colonialismo, donde, haciendo las veces de país periférico, México transfiere excedente, activos y recursos a los países centrales, principalmente Estados Unidos, pero también hacia algunos europeos y asiáticos. Las grandes corporaciones extranjeras y los acreedores internacionales, bajo figuras como la remisión de ganancias corporativas, pago de deuda externa, intercambio desigual y el comercio intrafirma, se apropian del grueso del excedente económico generado en el país. El aparato productivo nacional también es fuente de apropiación, donde la IED, más que capital fresco, es una fuerza que se adueña de sectores económicos productivos y rentables. El país se convierte, de nueva cuenta, en una reserva estratégica proveedora de recursos naturales baratos, como el petróleo, gas, minerales y maderas. Además, un recurso estratégico, abundante y barato, es la mano de obra, que se explota en las actividades controladas por el capital foráneo o mediante la migración laboral.

Desde otra perspectiva, este modelo representa para el país la vulneración del fondo social de acumulación, es decir, la extracción del cúmulo de recursos excedentarios derivados de la actividad productiva que pueden reinvertirse en el territorio nacional para activar la producción, el financiamiento, la distribución y el consumo. Al perder el control político sobre el uso y destino de estos recursos, ahora en manos de los grandes capitales privados, nacionales y extranjeros, se pierde la capacidad para diseñar, planear y conducir un modelo de desarrollo nacional. El derrotero nacional ahora está en manos de los designios corporativos de especuladores, consejos de administración,

fondos de inversión, consultores, financistas y demás agentes del capital que encarnan a las fuerzas abstractas del mercado, la nueva agencia del desarrollo neoliberal.

Pérdida de soberanía nacional

La imposición del modelo neoliberal requirió el desmantelamiento del modelo anterior, que sin dejar de ser excluyente, autoritario y antidemocrático, preservaba algunos principios soberanos que daban cierta consistencia a un proyecto nacional de desarrollo. La imposición del modelo neoliberal, desde la cúspide del poder, echó por tierra elementos nodales de ese proyecto, tales como la gestión del Estado, la industrialización por sustitución de importaciones y el Estado benefactor y su red de protección social, cuya cobertura radicaba, sin embargo, en el sector formal. El proceso de neoliberalización socavó, entonces, la estructura institucional que apuntalaba la soberanía nacional en rubros estratégicos, como el político, laboral, financiero, alimentario e industrial.

La nueva política macroeconómica propuesta por los organismos financieros internacionales representó el marco categorial de las reformas, en sustitución de la ideología estatal que giraba en torno del nacionalismo revolucionario. Por ejemplo, según el FMI era fundamental adoptar una serie de reformas coyunturales y estructurales que combaten la falta de crecimiento. Entre otras disposiciones, recomienda corregir los desequilibrios macroeconómicos, generar capacidad de pago internacional y desarrollar una economía de mercado. Al respecto, las estrategias más apropiadas eran la reforma fiscal, generación de excedente comercial, control monetario, apertura comercial y financiera, financiamiento externo y reducción del espacio económico del Estado. Derivado de lo anterior, se implementan reformas en los capítulos monetario, fiscal, comercial y factorial. No obstante, está previsto que el modelo de ajuste genere equilibrio macroeconómico, contracción del ingreso real y crecimiento moderado. La evidencia empírica para 2010 lo corrobora. El salario real muestra una contracción en niveles inferiores a los observados en 1970. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) ha sido inferior a 2 por ciento, una tendencia vigente desde 1980. En tanto que el equilibrio macroeconómico ha sido relativo, pues el déficit es inferior a 1.5 por ciento del PIB, menor al registrado en países como Estados Unidos, España, Japón y Brasil, entre muchos más, aun en escenarios de crisis; los niveles de inflación de un dígito están muy por debajo de los de nuestros principales "socios comerciales"; las tasas de desempleo son menores que en países como Argentina, Brasil,

Estados Unidos, Canadá y Francia, entre otros; y las tasas de interés pasivas se sitúan en un dígito.

Las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI y el BM trastocaron el esquema operativo de la administración pública. A partir de la crisis de 1982 se fue adoptando paulatinamente una política económica de corte ortodoxo (neoclásica), uno de cuyos principios es que el mercado funge como el regulador de la economía, en tanto que el Estado interventor resulta un agente que imposibilita alcanzar el equilibrio, dado que cuenta con entidades monopólicas que distorsionan los precios, como los energéticos o cualquier otra mercancía, ocasionando escenarios de crisis. Además, al Estado se le atribuyen acciones ineficientes y corruptas.

Los gobiernos encabezados sucesivamente por los priistas Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, y por los panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa han construido una colación político-empresarial que se ha empeñado en acrecentar el poder político de sus grupos de interés y en generar espacios de valorización para los grandes capitales nacionales y extranjeros. Bajo el nuevo modelo, el gobierno se reconfigura política y administrativamente siguiendo pautas de corte gerencial. El argumento justificatorio es que la administración pública es una instancia ineficiente para el manejo de los recursos públicos, por lo que es necesario llevar a cabo, en primer lugar, un proceso de exo-privatización, para que la producción de bienes y servicios públicos sea realizada por la administración privada y, en segundo lugar, una endo-privatización, que consiste en la sustitución de (¿los principios de?) la administración pública de los intereses nacionales por los principios de la gerencia privada (Guerrero, 2004). En términos generales, las ideas de bien público y solidaridad se sustituyen por la búsqueda de la ganancia, en un entorno dominado por las finanzas (Guttmann, 2009). Bajo esos preceptos, el propio Estado ha sido promotor de una serie de medidas que buscan disminuir por completo la actividad estatal en la economía al reajustar el gasto público, eliminar subsidios, regular el crédito público, privatizar empresas y servicios públicos, aumentar la carga tributaria a la clase media y baja.

La nueva gerencia pública propuesta por el modelo neoliberal persigue el equilibrio macroeconómico, la promoción de la inversión privada y el incremento sustancial de las ganancias; no el desarrollo humano, el bien común y la justicia social. En tal sentido, problemas como la pobreza en México no se "combaten" seriamente, sino que sólo se administran mediante programas paternalistas y compensatorios (Oportunidades, Solidaridad y Progresa) con objetivos eminentemente político-electorales.

La pérdida de soberanía política atribuible al Estado neoliberal tiene graves repercusiones sociales en el ámbito laboral y alimentario. En el primer aspecto, el Estado pierde la capacidad para generar las fuentes de empleo formal de calidad que demanda la población en edad de laborar (Márquez, 2008). Si a esto le sumamos el hecho de que los empleos formales disponibles son en su mayoría precarios e inseguros, al punto de que para una porción importante de trabajadores el hecho de tener un empleo no significa dejar de ser pobres. La respuesta social ante el achicamiento y precarización del mercado laboral ha sido múltiple: incursionar en la economía informal, permanecer en calidad de desempleado, incursionar en el crimen común y el crimen organizado –como el narcotráfico– o emigrar hacia otro país, principalmente Estados Unidos. La pérdida de soberanía laboral es signo del desmantelamiento del Estado social y de la primacía de los intereses del gran capital.

La destrucción inducida de las instituciones del México rural (las modificaciones al artículo 27 constitucional, el desmantelamiento del sistema de propiedad ejidal, la destrucción o deterioro de instancias de fomento a la economía campesina, como COPLAMAR, CONASUPO, FERTIMEX, PRONASE y BANRURAL) significó no sólo la ruina de la economía campesina y la propulsión del éxodo rural, sino también la destrucción de la principal fuente de alimentos de la nación, que demanda por razones históricas, culturales y agroecológicas alimentos como frijol, maíz, arroz, chile, azúcar, entre otros, pero que ahora depende de la importación de productos en rubros donde otrora se era estratégicamente autosuficiente. La pérdida de soberanía alimentaria está en la base de la intromisión de las grandes corporaciones agroindustriales, que controlan la exportación de productos agrícolas no tradicionales, como frutas y hortalizas, además de que impulsan la implementación de cultivos transgénicos. Como resultado, la economía campesina se desmantela como fuente de trabajo, subsistencia, preservación agroecológica y provisión de alimentos (Bartra, 2006; Rubio, 2004).

Falta de financiamiento para el desarrollo

Durante los últimos 30 años, uno de los grandes problemas ha sido la falta de recursos públicos para el financiamiento productivo. Bajo el desarrollo estabilizador las empresas grandes se financiaban mediante crédito público, en pesos o en dólares, con el aval del gobierno. Entonces la banca de desarrollo tenía un papel fundamental. Las empresas pequeñas disponían de la capacidad de autofinanciamiento, pues el mercado interno, aunque pequeño, era muy dinámico.

El problema comienza cuando se adopta una política monetaria de corte restrictivo que controla la oferta monetaria y pretende mantener estable el valor de la moneda. El objetivo es mantener finanzas públicas sanas y déficit públicos menores a 1.5 por ciento del PIB. Sin embargo, el crédito público se restringe.

El modelo de política económica impuesto contempla, como uno de sus objetivos fundamentales, disponer de recursos suficientes para hacer frente a los compromisos de la deuda externa, por encima de la satisfacción de las necesidades sociales y de la promoción del desarrollo productivo nacional. Según el último *Informe anual* del Banco de México (BANXICO, 2009), para el 2009 la deuda externa asciende, en valores preliminares, a 164 000 millones de dólares, y en los últimos trece años se ha pagado un promedio anual de 28.5 mil millones de dólares.

En este contexto, la banca de desarrollo ha sido prácticamente desmantelada y cambió su forma de operar: de ser una banca de primer piso se convirtió en una banca de segundo piso. Ahora sólo es una instancia intermediaria entre los bancos privados y las empresas que demandan crédito.

El sector bancario fue entregado, primero al empresariado nacional, y luego de que entrara en quiebra, fue rescatado con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (FOBAPROA), ahora Instituto para Protección de Ahorro Bancario (IPAB), que convirtió en deuda pública un impresionante programa de rescate en beneficio, no del sistema financiero nacional y sus usuarios, sino de los acaudalados dueños de la banca.[2] Los bancos saneados fueron entregados a la gran banca privada internacional, en abono de la pérdida de soberanía financiera y la pérdida de control sobre el sistema de pagos. Los programas de rescate se han instrumentado en otros sectores, como el sistema carretero privado y algunas grandes empresas en quiebra, como líneas aéreas y supermercados. Bajo este mecanismo se institucionaliza la transferencia de inconmensurables recursos públicos al sector empresarial bajo la estratagema de que se están rescatando fuentes de empleo, cuando en realidad se está engrosando la riqueza de los ya de por sí multimillonarios. En cambio, la deuda social derivada de múltiples formas de despojo y explotación no se reconoce, menos se subsana.

La banca comercial no tiene el interés de otorgar préstamos dado que casi 80 por ciento de sus recursos totales provienen de hacer negocios con los productos financieros derivados, emulando las prácticas financistas de sus casas matrices estadounidenses, españolas, canadienses y británicas. Desde

[2] El FOBAPROA representó un costo equivalentes al 20 por ciento del PIB, el cual pagarán los contribuyentes mexicanos en 30 años (*La Jornada*, 1 de febrero de 2009).

esta perspectiva, la economía mexicana pierde soberanía financiera y se ve inmersa en prácticas especulativas.

En ausencia de una banca crediticia, las pequeñas, medianas y grandes empresas ahora se están financiando con sus propios proveedores. No obstante, según BANXICO, las grandes empresas y las empresas AAA[3] acceden más al crédito de la banca de desarrollo o al de sus matrices extranjeras, dado que la mayoría de éstas son trasnacionales. Empero, empresas como Fiat y Renault en 2010 recibieron un crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Nacional Financiera (NAFIN) por un monto de 600 millones de dólares. Esto es una muestra de que los recursos públicos son destinados para financiar a firmas extranjeras como las automotrices, que pesa a ser las principales exportadoras, importan la mayor parte de materias primas, maquinaria, equipo, tecnología, diseño, personal directivo, por lo que su esquema operativo se parece más al de una maquiladora.

Para los estratos de bajos ingresos, considerados por el modelo neoliberal como población redundante, el Estado ha concedido a las grandes corporaciones la apertura de banca que, con el argumento de bancarizar a los pobres, otorgan créditos con altas tasas de interés, pero bajo el señuelo de abonos pequeños, tales como Bancoppel, Banco Azteca, Ahorro Famsa y Banco Walmart.

En este escenario, es difícil generar un mercado interno dinámico que fortalezca la economía y genere empleo con salarios dignos. Es por ello que se vuelve imperativo modificar la política económica en los rubros financiero, monetario y fiscal. La política monetaria no sólo debe controlar la inflación sino también generar las condiciones para crear empleos y crecimiento. Para ello debe dotar al gobierno de los recursos necesarios para reactivar la gestión estatal del desarrollo. Por el lado de la política financiera, es imprescindible inyectar liquidez a la banca de desarrollo para que, a su vez, ésta pueda financiar proyectos productivos de la MIPymes, las cuales son las generadoras de empleo en el país. En tal sentido, la banca de desarrollo debe dejar de ser una banca de desarrollo de segundo piso y convertirse nuevamente en una banca de primer piso. También cabe advertir que dotar de mayores recursos a la economía por medio de la emisión de billetes y monedas no es inflacionario, dado que el Estado cuenta con el monopolio de cobrar impuestos, pero éstos deben ser cobrados a los grandes evasores que hay en el país, como son las grandes empresas y las empresas AAA, más allá de achacar a la clase media y a la economía informal la causa del gran hoyo fiscal existente.

[3] Su clasificación depende según el valor de sus ventas, contrario a la clasificación convencional que es sobre el número de empleados.

Saldos del modelo neoliberal: desigualdad y pobreza

La pobreza y la desigualdad son problemas de proporciones gigantescas en México. Según los cálculos oficiales, en 2008 48.7 por ciento de la población nacional vive por debajo de la línea de pobreza patrimonial; 33.0 por ciento adicional se considera "vulnerable" por tener una o más carencias en las áreas de educación, salud, vivienda o cohesión social (CONEVAL, 2009). El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que, a principios de la actual crisis económica, sólo 18.3 por ciento de la población mexicana escapaba de la pobreza "multidimensional" y la vulnerabilidad.[4] Hay que tomar en cuenta, también, que estos cálculos tienden a ser conservadores en comparación con los de investigadores independientes, como Hernández Laos y Velázquez Roa (2003) y Boltvinik y Damian (2003).

Si bien las causas de la pobreza son muy complejas, lo seguro es que en México no se trata de una falta de riqueza, sino más bien de una mala distribución de la misma. Según el BM, México es un país de "altos ingresos", con un PIB per cápita de 14 270 dólares de paridad con poder adquisitivo. Por otra parte, el coeficiente de Gini, que mide la disparidad en el ingreso, fue de 0.530 en 2008, lo que convierte a México en uno de los países más desiguales del mundo (CONEVAL, 2009). Al mismo tiempo, según la revista *Forbes 2010*,[5] nueve mexicanos se incluyen en la lista de los más ricos del mundo, entre los cuales figuran dos personajes emblemáticos: Carlos Slim, dueño de Telmex y Joaquín Guzmán *El Chapo*, líder del cártel de Sinaloa. Más allá de la distribución de ingresos, otras dimensiones de la desigualdad incluyen:

1. *Entre el campo y la ciudad.* En las localidades con menos de 15 000 habitantes, 60.8 por ciento de la población tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza de patrimonio. En efecto, todos los indicadores sociales apuntan hacia rezagos en el campo, por ejemplo: mortalidad infantil, años de escolaridad, analfabetismo, seguridad social y servicios básicos para la vivienda (Tetreault, 2009).

[4] Estos cálculos se basan en el método de las líneas de la pobreza, un método unidimensional que mide sólo en términos de dinero, dejando de lado múltiples aspectos de la pobreza, incluso el acceso a los servicios públicos básicos de calidad en las áreas de salud, educación, vivienda y seguridad social. El método "multidimensional" del CONEVAL es una de varias propuestas para proyectar una conceptualización más complejo del fenómeno; el método de medición integrada de la pobreza (MMIP) de Julio Boltvinik es otra.

[5] Entre los nueve mexicanos multimillonarios sobresalen Carlos Slim, hombre más rico del mundo, y Joaquín Guzmán Loera alias *El Chapo*, octavo mexicano más rico y líder del cartel de Sinaloa. Se estima en 53 500 millones de dólares la fortuna del primero y en 1,000 millones de dólares la del segundo.

2. *Disparidades regionales*. El Distrito Federal y los estados en el norte del país (Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) tienden a tener los mejores índices de bienestar social, y los estados del sur del país (Chiapas, Oaxaca, Guerrero) tienden a tener los peores. Los demás estados se ubican entre estos dos extremos.
3. *Etnicidad*. 95.5 por ciento de las localidades indígenas (donde más de 70 por ciento de la población habla un idioma nativo) tienen marginación alta o muy alta (CONAPO, 2000). 80 por ciento de la población indígena económicamente activa tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza designada "patrimonial", una cifra tres veces mayor que el promedio nacional (INEGI, 2008).
4. *Género*. Si bien casi se ha cerrado la brecha entre mujeres y hombres en cuanto a los ingresos y el rezago educativo (González Licona, 2010), todavía existen desigualdades dentro del hogar: las mujeres pobres tienden a estar sobrecargadas con trabajos no remunerativos (González de la Rocha, 2006) y tienen menos acceso a la tierra (INEGI, 2007).
5. *Medio ambiente*. Como se verá en la próxima sección, las poblaciones marginadas son las que más sufren las consecuencias de la contaminación y del deterioro de los recursos naturales, dando lugar a movimientos socio-ecológicos.

¿Cómo sucedió todo esto? No es éste el lugar para analizar cuidadosamente la evolución de las políticas y condiciones estructurales en torno a la pobreza; baste observar que durante el periodo neoliberal las políticas sociales han sido subordinadas a la imperativa de mantener la estabilidad macroeconómica, y ésta se logra supuestamente a través de la fórmula neoliberal: comercio libre, privatización y desregulación. De acuerdo con lo anterior, para lograr mayores niveles de eficiencia, las políticas sociales han sido progresivamente restructuradas alrededor de los principios de "privatización" (transferir responsabilidades al sector empresarial), "descentralización" (transferir responsabilidades y recursos a los gobiernos estatales y municipales), "focalización" (dar prioridad a la población que vive en pobreza y, sobre todo, en pobreza extrema), "participación" (fomentar la corresponsabilidad de los beneficiarios de programas para combatir la pobreza) e "individualización" (fomentar el cambio de los diversos programas de pensiones a cuentas individuales, no regidas por el principio de solidaridad). De esta manera, las pretensiones de construir un Estado de bienestar universal han sido en gran medida abandonadas y las políticas sociales mexicanas se han pegado al modelo "residual" en la tipología tripartita de Esping-Andersen (1990).

Esta estrategia ha fracasado rotundamente. Según los datos oficiales disponibles (Székely, 2003; CONEVAL, 2009) la incidencia de pobreza de ingresos sólo bajó 4.3 puntos porcentuales a nivel nacional entre 1984 y 2008; lo que se traduce en un aumento de casi 11 millones de pobres en términos absolutos. Esto no es sorprendente si se toma en cuenta que el PIB per cápita creció menos de 2 por ciento anual en promedio durante el mismo periodo. Además, la "flexibilización" laboral y la supresión de los salarios no resultaron en la creación de más empleos, como los teóricos neoliberales esperaban, sino más bien en la precarización de los mercados laborales. En 1991, sólo el 40.1 por ciento de la población económicamente activa (PEA) fue incorporada al sector formal, y para 2006, esta proporción bajó a 39.8 por ciento. Durante el mismo periodo, el sector informal creció por casi 50 por ciento, de 17.32 a 25.78 millones de trabajadores.[6] Por si fuera poco, México ha sido el país latinoamericano mayor impactado por la crisis económica de 2008 hasta el presente (2010); en 2009 el PIB perdió 6.5 por ciento de su valor y la economía formal expulsó 429 mil trabajos.

El campo ha sido particularmente perjudicado. Los campesinos sufren un aumento en los costos de producción, la desaparición de crédito y el retiro de apoyos gubernamentales para la comercialización. Bajo estas condiciones, la actividad agropecuaria de pequeña escala deja de ser rentable, lo que se convierte en un acicate para la migración masiva a Estados Unidos y a los centros urbanos. Si bien la migración laboral frecuentemente conduce a una salida de la pobreza *de ingresos*, implica peligros y sacrificios, y no es una superación de la pobreza conceptualizada en términos más complejos. Las ciudades están sobresaturadas con barrios marginados y trabajadores "no-calificados", y la actual crisis económica ha reducido la disponibilidad de trabajos en Estados Unidos. En este escenario, no es casual que millones de jóvenes pobres vean buenas oportunidades en la producción y el tráfico de narcóticos.

¿Cuáles son las alternativas? Expertos izquierdistas en el tema de pobreza ofrecen una miríada de recomendaciones (Valencia *et al.*, 2010); entre las más importantes: el universalismo básico, lo cual implica la ampliación y homogenización de los sistemas de salud y seguridad social; reforma fiscal fuertemente redistributiva; fortalecimiento de derechos sociales; intervenciones gubernamentales orientadas a la generación de empleos (Valencia, 2010), y programas de desarrollo rural integrado que reflejan el concepto de soberanía alimentaria (Hernández-Navarro y Desmarais, 2009). En un nivel más general, se trata de reorientar el proyecto civilizatorio hacia la intercul-

[6] Cálculos propios basados en datos incluidos en Levy (2008: 90-91).

turalidad (Bonfil, 1987), la erradicación de pobreza, menos desigualdad y la sustentabilidad ecológica. Para ello se requiere, desde una perspectiva socio-democrática, la construcción de amplias coaliciones socio-políticas que puedan imponer mayor control regulatorio sobre el capital y establecer mecanismos de redistribución más efectivos. Por su parte, los neomarxistas y los activistas asociados con los movimientos sociales radicales ven la necesidad de poner fin definitivo al sistema capitalista y construir una u otra forma de alternativa socialista, o bien estatista (como en Venezuela), o descentralizada sobre las líneas del anarquismo clásico (los caracoles zapatistas ofrecen un ejemplo contemporáneo de ello).

Degradación del medio ambiente

Durante las últimas décadas, la devastación ambiental ha avanzado a lo largo y ancho del país, manifestándose en la desaparición de manglares y bosques, la erosión de suelos, urbanización descontrolada, pérdida de diversidad biológica y genética, y crecientes niveles de contaminación terrestre, acuática y atmosférica. Aun los cálculos conservadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reconocen que la deforestación avanza a un ritmo de entre 316 000 y 800 000 hectáreas anuales, que la erosión ha afectado 45 por ciento del territorio nacional, que casi 2 600 especies de plantas y animales están en peligro de extinción, y que más de cien acuíferos están sobreexplotados (SEMARNAT, 2005). No es fácil cuantificar los problemas ambientales, entre otras razones, por la dificultad de separar los efectos antropogénicos de los naturales (Blaikie, 1985), lo que se presta a exageraciones o minimizaciones por razones políticas, tanto por parte del gobierno como por los representantes de movimientos ambientalistas (Escobar, 1996; Forsyth, 2003). Desde esta óptica, las estadísticas oficiales tienden a subestimar la crisis ecológica, no sólo por minimizar las cifras mencionadas y omitir algunas formas de degradación ambiental, sino también porque no toman en cuenta a la población afectada.

En México, así como en otras partes del mundo, los afectados ambientales tienden a ser pobres o cuando menos "relativamente pobres", mientras que las ganancias derivadas de las actividades económicas contaminadoras se concentran en las manos de los ricos. A nivel mundial, las corporaciones transnacionales han reubicado sus industrias altamente contaminantes en países como México, donde las leyes ambientales son relativamente laxas y no se hacen valer; y en el ámbito nacional las actividades capitalistas ecológicamente destructivas tienden a ubicarse en zonas marginadas, donde viven

los indígenas, obreros y pobres. Por esta razón, no es sorprendente ver la emergencia de movimientos de resistencia verde en estas zonas, aptamente llamado "el ecologismo de los pobres" por el reconocido economista ecológico Joan Martínez-Alier (1994, 2009).

Durante la primera década del siglo XXI, el ecologismo de los pobres se ha manifestado en muchas partes de México, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Por el lado propositivo, se han construido alternativas ecológicamente sustentables desde abajo, incluyendo la agroecología, el manejo forestal comunitario, el comercio justo y el ecoturismo (véase Darcy Tetreault en este mismo libro). Por otra parte, los pobres y sus aliados llevan a cabo acciones de protesta y demanda en un esfuerzo por resistir la depredación de recursos naturales impulsada por la industrialización capitalista. Algunos de los conflictos que más han recibido atención a nivel nacional giran en torno a la construcción de grandes presas o la amenaza de construirlas (por ejemplo, El Arcediano y El Zapotillo en Jalisco; La Parota en Guerrero; Paso de la Reina en Oaxaca; y la presa Picachos en Sinaloa); la destrucción masiva causada por compañías mineras (por ejemplo, Blackfire en varias partes de Chiapas; New Gold y Majestic Silver en San Luis Potosí; Fortuna Silver en Oaxaca; y Peña Colorada en la frontera entre Colima y Jalisco); y la contaminación causada por las maquiladoras en Tijuana; las Granjas Carroll (Smithfield Foods) en Veracruz, y los desechos industriales y municipales que se vierten en el río Santiago y muchos otros. Además, ha existido protestas en contra de los planes para extender la línea 12 del metro en el Distrito Federal hasta Tláhuac; el intento de edificar un aeropuerto en San Mateo Atenco; el mega-proyecto de la construcción de autopistas en el estado de Puebla; y la carretera Bolaños-Huejuquilla en Jalisco. Hay muchos otros casos y todos tienen una dimensión ecológica explícita en los discursos de los manifestantes. Por otra parte, desde principios de la década de los 2000, varias organizaciones coordinadoras emergieron en el ámbito nacional para articular estas luchas, entre las más importantes: la Red Mexicana en Defensa del Maíz Nativo, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Con todo, se trata de un nuevo frente de resistencia al desarrollo capitalista neoliberal.

Paradójicamente, las políticas ambientales mexicanas han recibido un gran impulso durante el periodo neoliberal, cuando menos en un nivel superficial. Desde los años ochenta, en concordancia con la agenda internacional en torno al desarrollo sustentable, se construyó un entramado jurídico e institucional cada vez más integral, culminando en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la SEMARNAT, con sus múlti-

ples dependencias. Por otra parte, estos avances no han sido acompañados por un compromiso presupuestal conmensurado. De hecho, en 2008 el presupuesto de la SEMARNAT sólo representó 2.06 por ciento del gasto programable o aproximadamente 0.32 por ciento del PIB.[7] Así, las políticas ambientales, al igual que las sociales, han sido subordinadas a las políticas económicas. En otras palabras, durante el periodo neoliberal, las prioridades del Estado han sido mantener la estabilidad macroeconómica y realizar el crecimiento económico a través de la liberalización económica y financiera; y este modelo de desarrollo no ha sido cuestionado seriamente en términos ambientales. Más bien, el gobierno federal ha asignado al mercado un papel cada vez más importante en el control de los problemas ambientales.

La teoría neoliberal de la economía ambiental sugiere que se necesita cierto nivel de desarrollo económico antes de que se pueda revertir la tendencia de degradación ambiental. Desde esta perspectiva teórica, el ambiente natural tiende a deteriorarse durante las etapas iniciales del desarrollo industrial, sólo para recuperarse en etapas posteriores, una vez que la economía haya alcanzado un punto en donde se disponen de suficientes recursos para invertir en tecnologías verdes y políticas ambientales. Se supone que esto coincide con un cambio en la composición de la economía nacional, en donde el sector terciario gana importancia en relación con los sectores primario y secundario, con la implicación de que las actividades relacionadas con servicios e información son menos destructivas para el medio ambiente. Asimismo, desde esta perspectiva, una vez que las necesidades básicas estén satisfechas en mayor medida, los valores dominantes cambian de intereses materiales a no materiales, incluyendo mayor aprecio por un ambiente natural limpio (Inglehart, 1977). Todo esto busca su validez empírica en la observación general de que, hoy en día, los países desarrollados tienden a procurar ambientes naturales más limpios que los países en desarrollo, y supone que estos últimos pueden seguir, y en los hechos seguirán, las huellas de los anteriores, de acuerdo con el paradigma de la modernización. Todo esto se ha resumido de forma nítida en la curva ambiental de Kuznets (EKC, en sus siglas inglesas), una hipótesis expuesta quizás con mayor entusiasmo por Panayotou (1995).

Sin embargo, lo que el modelo EKC no toma en cuenta es que los países desarrollados pueden transferir sus actividades altamente contaminantes a países en desarrollo, como México. No considera que los países ricos puedan ejercer presión sobre la base de recursos naturales de los países pobres y que históricamente las naciones prósperas se han apropiado de más de su porción de los bienes comunes de la humanidad, por ejemplo, al usar la atmós-

[7] Cálculo propio basado en datos encontrados en http://www.semarnat.gob.mx y http://www.inegi.gob.mx

fera como un sumidero para los gases de efecto invernadero. Desde esta perspectiva crítica, los países ricos tienen una huella ecológica mayor que los pobres (Wakernegal y Rees, 1996), existen límites biofísicos al crecimiento económico y algunas formas de degradación ambiental pueden ser irreversibles.

De cualquier manera, México no ha alcanzado el punto de inflexión sobre la curva EKC en donde el deterioro ambiental, como la contaminación del Santiago, empieza a disminuir, a pesar de que es considerado un país de ingresos altos. En cambio, lo que hemos visto es la manifestación de una crisis multidimensional que ha mantenido al modelo neoliberal en jaque. En este contexto, los movimientos socioambientales han contribuido a la última crisis del capitalismo. En términos marxistas, reflejan lo que O'Connor (2002) llama "la segunda contradicción interna del capitalismo", en donde la presión de la sociedad civil contribuye a una reducción de ganancias al demandar que el capital internalice sus externalidades ambientales y sociales. El grado despreciable en el que esto ha sucedido en México sólo sirve para resaltar las tensiones políticas, ambientales y sociales que se han expresado.

Economía del conocimiento: ¿beneficio para quién?

La política de ciencia y tecnología (CyT) en México es una palanca que promueve la competitividad de las empresas, como lo muestran los procedimientos y planeación de la política pública más recientes. Esto es promovido por organismos internacionales como una receta técnica para impulsar el desarrollo en México.

El BM promueve, desde 2000, un programa conocido como *Knowledge for Development: Capacity Building for the Knowledge Economy* (K4D). Este programa provee de asistencia técnica a los países que buscan crear una economía del conocimiento (Banco Mundial, s/f). El programa impulsa, entre otras cosas, las capacidades tecnológicas y de innovación para pasar de una economía basada en las manufacturas a un economía fundamentada en la mente-factura. El BM aclara que, en primera instancia, es necesario hacer un diagnóstico de las capacidades en CyT de cada país/cliente. Para tal propósito, el BM ha desarrollado una metodología de evaluación denominada *Knowledge Assessment Methodology* (KAM).[8] A partir de dicha evaluación se determina el posicionamiento de la economía nacional en el mercado mundial.

[8] En la página del KAM se puede leer que la metodología consiste en: "83 variables estructurales y cualitativas para medir el posicionamiento de 140 países dentro de los cuatro pilares de

La plataforma de la economía del conocimiento requiere que la CyT se oriente hacia y para el sector privado, pues se asume que de esta forma las innovaciones se traducirán en ventajas comerciales en el mercado mundial. Esto coincide con el presupuesto neoliberal de que el Estado debe ser administrado por empresarios para impulsar a las empresas.[9] Por su parte, el instrumental teórico que impulsa a la CyT actualmente, es decir, para las teorías evolucionistas o neoschumpeterianas, la innovación resulta de la interacción entre el gobierno, la industria y la universidad. A tal modelo se le conoce como "triple hélice" o *círculo virtuoso de la innovación* (Etzkowitz y Leydesdorff, 2001). Vale decir que, aunque los evolucionistas intentan desmarcarse de la plataforma neoliberal, estas teorías reivindican al mercado, la competitividad y la libre empresa como claves del crecimiento económico. La CyT en México se configura, precisamente, en torno a estos preceptos. A la fecha, en el marco del programa K4D, se han creado planes para agrupar o *clusterizar* a empresas, industria y universidades, y se han creado varios parques de alta tecnología en el país. Además, en 2002, se creó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) para transformar las expresiones de las comunidades científica, académica, tecnológica y productiva en política pública de CyT. Esto quiere decir que el diagnóstico de las necesidades sociales queda solamente a cargo de estos tres actores. Es necesario puntualizar, sin embargo, que la sociedad está formada por otros grupos sociales y que pueden abonar a enriquecer el diseño de la política tecnológica y científica: los sindicatos, los grupos campesinos, las asociaciones civiles y los grupos indígenas. En un país como México, en donde la pobreza y la inequidad predominan, es necesario escuchar las voces de todos los actores sociales. De esta forma se puede diseñar una política científico-tecnológica que se vincule con las necesidades sociales de la mayoría, es decir, hacer CyT con un enfoque de desarrollo social y no para incrementar la ganancia y competitividad de las empresas.

El camino hacia la economía del conocimiento en México ha ignorado el aporte de grupos sociales mayoritarios y la CyT se ha subsumido a los intereses de la clase capitalista. En 1991, por ejemplo, se creó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial para proteger procesos, productos y desarrollos de empresas nacionales y extranjeras en territorio nacional (Rocha y López, 2003), y se cambió el marco legal en materia de protección de propiedad industrial para garantizar la ganancia monopólica en innovación por

---

la economía del conocimiento (KE): incentivos económicos y régimen institucional, educación, ciencia, tecnología e innovación y tecnologías de la información y comunicación".

[9] De aquí que el concepto de "gestión pública" se asocie con el precepto de administración bajo el neoliberalismo.

20 años, como lo legisla el marco internacional. Por su parte, los Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CPIS-CONACYT) impulsan iniciativas para generar patentes en beneficio de la industria privada. Con el objeto de hacer el *círculo virtuoso de innovación* más eficiente, los CPIS facilitan que el científico se vuelva empresario. De acuerdo a la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en 2002, los CPIS pueden otorgar hasta el 70 por ciento de las regalías por derecho de propiedad intelectual a los investigadores que desarrollen aplicaciones comerciales (DOF, 2009). La CyT de México llega a la sociedad a través del mercado; éste media las relaciones entre las empresas y la sociedad, transfiere los productos y servicios para satisfacer determinadas necesidades y decide la orientación productiva de las empresas. Estas últimas, ante las presiones de la competencia y la búsqueda de ganancia, moldean el diseño de la CyT, que no necesariamente se vincula con las necesidades de 80 por ciento de la población que vive en pobreza o en situación de vulnerabilidad (CONEVAL, 2009). Lo anterior invita a realizar cambios profundos en la forma en que se construye la política científica en México. Es necesario considerar las necesidades de los actores o clases sociales que no participan, ¿o será que la CyT en México, bajo el esquema de la "triple hélice" y de la mano de la política neoliberal, logrará mejorar las condiciones de vida de la mayoría de mexicanos?

Derechización del sistema político

Para la clase política, medios de comunicación, gobernantes e intelectuales orgánicos, México representa un país democrático donde se respeta el sufragio popular y se dispone de instituciones electorales en manos de la ciudadanía: el Instituto Federal Electoral (IFE) y los institutos electorales estatales, que sin embargo permanecen acotados por los intereses de los partidos políticos a nivel federal y de los gobernadores en las entidades de la república. La principal evidencia de la supuesta democratización es que en 2000 terminó, por fin, la prolongada hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de setenta años en el poder, para ceder la presidencia de la república al Partido Acción Nacional (PAN), en manos de Vicente Fox Quezada. Un partido y un candidato que, al menos en el discurso, se presentaban como una oposición electoral al PRI, que habría de desterrar la corrupción, la antidemocracia y promover el bien común. No obstante, la primera década de gobiernos panistas no sólo ha dado continuidad a esos males, sino que los han profundizado y han acentuado los problemas estructurales del país. Ante la evidencia de que la economía de mercado es fuente de estos problemas, los tecnócratas panistas responden que la solución es "mercado, mercado y más mercado".

Desde las altas esferas del poder político, una sucesión de gobiernos de derechas se han alternado el poder. En apariencia, la alternancia electoral entre el PRI y el PAN ha representado, si no una "transición política", cuando menos una "democratización" en el plano electoral. No obstante, al menos en dos ocasiones, el fantasma del fraude electoral empañó los comicios y puso en duda la existencia de un régimen de libertad política. La presunción del fraude electoral se instrumentó para evitar el arribo al poder de la centro-izquierda encabezada consecutivamente por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1988 ("la caída del sistema") y Andrés Manuel López Obrador en 2006 (los "dados cargados de Fox" y la *guerra sucia* del PAN-gobierno "AMLO: un peligro para México"), pero en cambio no hubo mayor obstáculo para que el PRI cediera en 2000 el poder al PAN, toda vez que ambas expresiones políticas comparten una ideología neoliberal, derechista y conservadora; a tal grado que ejercen una especie de cogobierno, que algunos han designado, como PRIAN. La élite política puede tolerar y aun conceder el relevo entre partidos de la derecha, pero no tolera la cesión de espacios de poder federal a la izquierda. Más aún, ha impulsado una estrategia de cooptación para que los líderes formales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acompañen electoralmente al PAN, en frentes electorales de centro-derecha. Esta operación política ha debilitado drásticamente a la opción electoral de izquierda que encabeza Andrés Manuel López Obrador, cuyo cometido explícito es impulsar un llamado "proyecto alternativo de nación".

El monopolio político de la representación lo ejercen los partidos. El PRI y el PAN conforman una coalición neoliberal de facto. Los partidos políticos han constituido una suerte de colación política neoliberal que se plasma en los proyectos del gobierno federal y local, en las agendas parlamentarias y en las campañas políticas. Todo gira alrededor de las "reformas estructurales que el país necesita", es decir, profundizar las reformas neoliberales, pues se dice que están pendientes algunas privatizaciones: PEMEX, IMSS, ISSSTE, CFE, el sistema educativo, entre otros; la reforma laboral, orientada hacia una legislación de despido libre, ya adelantada, de facto, en casos como la extinción por decreto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC) (cuyo Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) era uno de los más combativos, y por tanto un mal ejemplo); la reforma fiscal, que por la vía de los hechos ha venido incrementando el impuesto al consumo de las clases populares (IVA, "gasolinazos"), al tiempo que se preserva el régimen de evasión fiscal para grandes empresas); la reforma educativa, con amagos de privatización y deterioro permanente del presupuesto educativo. Los liderazgos del sistema de partidos políticos están interesados en preservar sus posiciones de poder, no

representar los intereses populares, pues esto les reporta acceso a recursos, privilegios, puestos, reflectores. El interés de ellos es perpetuarse en el poder, no cambiar el modelo de desarrollo. El espectro político de la derecha está creciendo, al punto de abarcar a los grandes partidos (PRI y PAN), a los partidos "satélites" (Partido Verde Ecologista de México [PVEM], Partido Nueva Alianza [PANAL]), pero lo más sintomático es cómo está cooptando al PRD.

Los gobernantes emanados de la nomenclatura derechista, independientemente del color o denominación partidaria, ejercen el poder como un fetiche. Es decir, no como la representación popular, emanada de la soberanía del pueblo, para promover el bien común social, el desarrollo humano generalizado, sino para detentar el poder de manera unipersonal, preservar y ensanchar sus ámbitos de poder. La vocación del político es escalar en el sistema jerárquico de poder y con ello acceder a ingresos fabulosos, fuentes privilegiadas de negocios, control de información y poder de decisión. Para ello, los gobernantes promueven, antes que nada, su imagen personal, antes que un proyecto de desarrollo o los intereses de la sociedad. Se invierten caudalosos recursos públicos en *marketing* político y en campañas electorales. Asimismo, desde el poder se tejen relaciones estratégicas con el sector empresarial, para hacerse participes de los negocios, relaciones interesadas y corruptas. El gobierno neoliberal se ejerce desde la llamada nueva gerencia pública, instituida por la primera ministra británica Margaret Thatcher, que adopta criterios empresariales para abrir espacios de inversión al capital privado y generar una serie de facilidades e incentivos a la inversión, tales como exenciones fiscales, dotación de infraestructura, becas a los trabajadores, información privilegiada, recursos públicos, etcétera. En México, Fox sintetizó descaradamente el principio de esta forma de gobierno: "un gobierno de empresarios para empresarios".

Los medios de comunicación de masas, principalmente electrónicos, han jugado un papel muy importante para legitimar el modelo neoliberal y a sus gobernantes. Este papel ha sido muy redituable, porque les ha permitido jugar un rol político preponderante, al punto de que los erige como un poder fáctico, que para muchos analistas puede llegar a representar un poder supremo, incluso por encima del poder del Estado. Por ejemplo, en la etapa priista Televisa se asumía como un "soldado del presidente", como decía su propietario Emilio Azcárraga Milmo; pero con el panismo, existe la presunción de que la agenda legislativa y la función presidencial resultan acotadas por estos poderes fácticos. Más aún, el poder mediático tiene la potestad de destruir o construir candidaturas, como sucede con el priista Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México (Villamil, 2009). Pero también se

cuentan entre los principales beneficiarios al incrementar su lugar en las concesiones del espectro radioeléctrico, que se considera un bien de la nación, además de que son los grandes beneficiarios de las crecientes campañas publicitarias de los gobiernos y de los partidos políticos.

La influencia de la televisora también ha rebasado, con mucho, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que año con año atestigua el derrumbe del nivel educativo de los educandos y de la población en general, en prácticamente todos los campos del conocimiento, mientras que las televisoras incrementan notablemente su influencia en públicos de todas las edades, con lo cual forman y manipulan la opinión pública y deforman los patrones de consumo, de acuerdo al interés de las grandes corporaciones, algunas de las cuales no tienen ningún escrúpulo en vender alimentos chatarra –que producen obesidad y desnutrición, sobre todo en la población de bajos ingresos– o productos "milagro" en sustitución de medicamentos o servicios médicos para atender problemas de salud.

Además, las televisoras representan la principal fuente de información y de noticias para la mayoría de la población, que no lee periódicos o revistas; es decir, para los analfabetas funcionales; la información que por esta vía se difunde está en sintonía con las instancias gubernamentales y los grandes corporativos privados. Los sectores opositores, marginados y excluidos no tienen cabida. Es la voz del poder, que en el priismo tenía a Jacobo Zabludovsky como su emisario y ahora a diversos personajes encabezados por Joaquín López Dóriga que ejercen un autollamado "cerco informativo" próximo a los intereses establecidos. Por si fuera poco, la mayoría de la población tiene en la televisión privada su principal fuente de entretenimiento: futbol, telenovelas, caricaturas, que amén de su contenido adocenado, constituyen un importante dispositivo publicitario y controlador de la conciencia colectiva.

Los intelectuales mediáticos, junto a los periodistas de las grandes cadenas de televisión, son los que se asumen como líderes de opinión. Desde sus trincheras mediáticas caricaturizan a los grupos críticos y opositores, y defienden las medidas gubernamentales. Los grupos intelectuales más próximos al poder, aglutinados en las revistas *Vuelta* (*Letras libres*) y *Nexos*, amén de que disputan entre ellos la ascendencia con los gobernantes en turno, dictaminan sobre los problemas nacionales y las vías de solución.

En tanto, el poder de las iglesias, principalmente de la católica, va disminuyendo entre la población, ante episodios truculentos como la pederastia y la corrupción –como el caso emblemático del padre Marcial Maciel, jerarca de los Legionarios de Cristo (Aristegui, 2010)–, pero también por sus posturas anacrónicas y retrogradas ante los problemas de la sociedad contemporánea,

pero se acrecienta entre los gobernantes de la derecha, que cada vez más son conservadores, y muchos afectos a grupos secretos de ultraderecha, como el Yunque (Delgado, 2003), que además de promover la agenda política y económica neoliberal, están empeñados en trastocar el sistema educativo para fomentar la educación confesional, además de estar en contra de los derechos de las minorías y excluidos, tales como los derechos reproductivos de la mujer, la uniones legales entre personas del mismo sexo, la educación sexual, etcétera.

Los sindicatos han sido uno de los eslabones del sistema de poder, específicamente para fines del control político de la clase trabajadora, y también han sido una importante reserva electoral del partido de Estado. Este papel, históricamente lo desempeñó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y su sempiterno líder Fidel Velázquez. Con el arribo al poder del PAN no se trastocó esta relación, sólo se reorientó hacia una especie de neocorporativismo, que le sigue reportando importantes dividendos y legitimidad a los gobernantes. Sindicatos como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo (que fundó el PANAL), juegan un papel político electoral importante para legitimar el modelo neoliberal. Prevalecen los sindicatos blancos y sus contratos de protección, que están hechos según los intereses empresariales. En tanto que la inversión extranjera impone el criterio de no sindicalización, como el caso paradigmático de Walmart.

La sociedad mexicana posee, en términos generales, un talante conservador, producto del proceso histórico de gestación del Estado-nación. La herencia católica está impresa en el inconsciente colectivo, más allá de que sean o no católicos practicantes. Las festividades y tradiciones tienen un sustrato religioso, como la devoción a la virgen de Guadalupe. El PRI es otra fuente del conservadurismo, en su momento representó la mayor influencia conservadora de la sociedad y el Estado, cuya cultura de corrupción, populismo y demagogia persisten. Este papel lo ha retomado, desde la cúspide del poder, el PAN gobernante. Asimismo, los medios masivos de comunicación difunden el ideario conservador.

Existen algunos esfuerzos organizativos de la sociedad que intentan impulsar alternativas al neoliberalismo, con distinto nivel de incidencia. En el frente electoral, el movimiento cívico electoral, más que partidario, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que pudo haber asumido la Presidencia de la República en 2006, representa el único proyecto nacional de corte alternativo con representatividad nacional. En el sector rural se han venido fraguando distintas organizaciones, como El Barzón, El Campo no Aguanta

Más y Sin Maíz no hay País, que sumados al movimiento altermundista Vía Campesina promueven la soberanía alimentaria como una estrategia social y productiva rural, opuesta al sistema agroalimentario mundial centrado en los tratados de "libre comercio", como el TLCAN. También en el medio rural emergió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para defender el modo de vida del sector indígena y campesino, ante la embestida neoliberal. En un momento determinado, este movimiento extendió su activismo al medio urbano con la Otra Campaña, en el contexto de las elecciones federales de 2006. Como complemento, existe una amplia constelación de organizaciones y movimientos dispersos, localizados, cuyas reivindicaciones son inmediatistas y coyunturales. El gran desafío, empero, es configurar un agente colectivo del cambio, más allá de lo electoral, maniatado por los partidos derechistas.

Narcocapitalismo

El capitalismo en México ha tenido diferentes caras y configuraciones, así como distintos impactos sociales; su espíritu, no obstante, ha permanecido inmaculado y potencializa, en su cuerpo neoliberal, el incremento de la inequidad, la pobreza y la precarización del salario para la gran mayoría, y acumulación de riquezas y ganancias incalculables para muy pocos. En su particularidad, el neoliberalismo en México manifiesta las peores secuelas de las leyes de acumulación de capital.

Merced a la búsqueda incesante para obtener la máxima ganancia posible se emplean todos los medios legales-permisibles, pero también, desde la década de los setenta aunque con mayor énfasis en el periodo neoliberal, el acicate por incrementar la tasa de beneficio se ha vinculado a una estructura ilegal-criminal: el narcotráfico. Esto no quiere decir que en el capitalismo mexicano exista una ambivalencia divergente, pues tanto lo permisible como lo criminal buscan lo mismo: la explotación del trabajo vivo.[10]

Vale puntualizar, sin embargo, que el fenómeno del narcotráfico y su inserción en la economía mexicana no es reciente ni tampoco se limita a un contexto nacional. Por el contrario, el narcotráfico ha permeado la estructura nacional a partir de intereses geoeconómicos y geopolíticos, principalmente de Estados Unidos. De acuerdo a Hernández (2010), la relación entre el Estado, el empresariado, la sociedad y el narcotráfico se origina en *el plan Irán-Contra* de los ochenta. El gobierno de Estados Unidos vendía armas a

[10] Para profundizar en el tema véase Iñaki Gil de San Vicente (2005).

Irán y permitía el tráfico de drogas hacia su propio país para financiar a los *Contras* en Nicaragua y cualquier otro movimiento contrarrevolucionario en Centroamérica. De esta forma, el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y el de Guadalajara, al mando de Caro Quintero y Miguel Félix Gallardo, que a la postre daría a luz a los diferentes cárteles mexicanos, se beneficiaron de la tolerancia del Estado mexicano y del estadunidense. Poco a poco, la distancia entre el gobierno, los capitalistas y los narcotraficantes en México se fue diluyendo. En un primer momento los narcotraficantes pagaban impuestos al Estado y lavaban su dinero con la ayuda de grupos empresariales y bancos. Posteriormente, *el narco* empezó a controlar puestos de gobierno e importantes sectores de la burocracia se convirtieron en sus empleados informales, en tanto que varios grupos empresariales y financieros se convirtieron en socios, lo que posibilitó el surgimiento de grandes oligopolios. El entramado *narco-económico* siguió creciendo hasta que algunos cárteles, ya en control de los más altos niveles de poder político, iniciaron una guerra en contra de otros grupos rivales (Hernández, 2010), lo cual ha cobrado, hasta finales del 2010, más de 31 000 vidas, según las cifras oficiales.

Expertos en la materia estiman que anualmente los cárteles mexicanos manejan entre 30 y 40 mil millones de dólares por la venta de estupefacientes en Estados Unidos (*Excélsior*, 13/11/2010). Este dinero se lava y se inserta en la economía mexicana en empresas, bancos y sociedades de beneficencia. Y, para mantener la cohesión social y el apoyo popular, los cárteles han buscado llenar los vacíos del Estado mexicano. Es así como algunos de ellos han implementado programas de asistencia, de impartición de justicia, de protección e, incluso, de recaudación de impuestos (Cano, 2010). Consecuentemente, en varias partes del país se fragua un escudo de protección social a favor de los cárteles, que incluye más de 450 mil empleados del narcotráfico (Rios y Sabet, 2008).

Asimismo, hay una fuente potencial para proveer de trabajo vivo a la estructura ilegal-criminal: los jóvenes que ni estudian ni trabajan, es decir, los llamados *ninis*. De acuerdo a la última Encuesta Nacional de la Juventud, hay 7 millones 231 mil jóvenes en esta condición (ENJ, 2005).[11] Otro factor que viabiliza la incorporación de jóvenes a las filas del crimen organizado es la facilidad con que estos pueden acceder a las drogas. Según una encuesta

[11] La Secretaría de Educación Pública, en 2010, reconocía la existencia de sólo 282 mil *ninis* en México. El problema es que basa esta cifra en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, donde la juventud se contempla entre los 15 y 24 años, y los "quehaceres del hogar", no remunerados, son considerados como parte de las actividades laborales. Esto contrasta con los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, pues la juventud se considera a partir de los 15 y hasta los 29 años, y la actividad laboral implica algún tipo de remuneración.

levantada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2009 20 por ciento de jóvenes tenían acceso a algún tipo de drogas, mientras que en 2010 la cifra fue de 50 por ciento (Amador, 2010).

La cooptación forzada, mediante el secuestro de migrantes centroamericanos que transitan en México para llegar a Estados Unidos, es otra forma de allegarse de mano de obra para los cárteles mexicanos. El Instituto Nacional de Migración señala que se han documentado, sólo en 2010, 222 casos de migrantes secuestrados; mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos guarda un registro de 20 mil migrantes que fueron privados de su libertad para ser extorsionados o que, quizá, engrosaron las filas del narcotráfico (*La Jornada*, 26/12/2010).

En México existen las condiciones y las coyunturas para que la estructura ilegal-criminal persevere; ya no podemos hablar de un capitalismo sino de un narcocapitalismo con cara neoliberal y en pleno vigor. Está de más hablar de la supuesta "guerra" emprendida por el actual presidente Felipe Calderón, ya que no tiene caso explorar una lucha contra un ente que el mismo gobierno ha creado. Es importante seguir la estructura criminal que se arraigó en la relación social de producción y que aprovecha las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad y de precarización de la mayoría para consolidarse. Vale puntualizar, sin embargo, que la economía política del narcotráfico en México es un tema pendiente en la agenda académica, por lo que habrá que explorar este fenómeno a mayor profundidad en un futuro.

Conclusiones

La neoliberalización significa la entrega de los bienes de la nación, bienes comunes y empresas estatales, además de recursos naturales y humanos, y la transferencia del excedente económico hacia los grandes monopolios y oligopolios nacionales y extranjeros. Esto significa que se pierde la capacidad de controlar esos elementos para fomentar el desarrollo nacional y se producen nuevas fuentes de generación y apropiación de la riqueza en beneficio de las élites sociales.

Los grandes beneficiarios de la neoliberalización son: los sectores que concentran capital, la burguesía nacional y transnacional; el poder (la burocracia política y los políticos de la coalición neoliberal); riqueza (la élite social); conocimiento (los sectores controladores del trabajo científico tecnológico), y la información (los grandes medios de comunicación). En conjunto, conforman el capitalismo de compadres o la oligarquía neoliberal.

Los costos del neoliberalismo son múltiples. Entre otros, conviene destacar la profundización de las condiciones de subdesarrollo: desempleo estructural, dependencia tecnológica, pobreza. Fractura del proceso metabólico sociedad naturales. Inseguridad laboral, social y pública (violencia, asenso del crimen organizado). No obstante, el neoliberalismo se encuentra en crisis, no sólo por la reciente crisis financiera, sino todo el proyecto de globalización neoliberal, que surgió como respuesta a una crisis sistémica en la década de los setenta y que ha experimentado sucesivas crisis.

Las condiciones de subdesarrollo se han profundizado notablemente bajo el neoliberalismo:

1. Desempleo estructural. La desproporcionalidad entre las estructuras demográficas y las productivas, amén de la renuncia al pleno empleo como objetivo central del desarrollo, propician que el desempleo sea un dato constante en el capitalismo subdesarrollado. Es además una ventaja para el empresariado, que prácticamente no encuentra resistencias para sobrexplotar a los trabajadores en condiciones de inseguridad laboral. Las respuestas sociales al estrechamiento y precarización laboral son múltiples, pero todas ellas degradantes: el trabajo informal, la emigración y el crimen. Estas vías de escape representan asideros peligrosos para acceder a medios de subsistencia, individual y familiar, pero a nivel colectivo están contribuyendo a postergar una respuesta social pacífica orientada a generar un estadio de justicia social, bien común y un desarrollo humano generalizado. El neoliberalismo es un sistema basado en la conculcación de los derechos humanos y en la fractura de las relaciones sociales.
2. Incremento de las desigualdades sociales y de la pobreza extrema. El capitalismo neoliberal es un sistema de acumulación y poder basado en las desigualdades sociales. No podría ser de otra forma cuando sus objetivos centrales son maximizar la ganancia del gran capital e incrementar el poder de la élite social. Para ello, es condición necesaria desarticular los sistemas de subsistencia social, socavar el poder de los trabajadores organizados, desmantelar el Estado social o benefactor, todo en aras de mercantilizar la naturaleza, los servicios públicos, los bienes comunes y los bienes de la nación. Bajo esa lógica, los sectores sociales sin poder de compra, sin capacidad de competir, sin capacidad de respuesta, pareciera que tienen el único derecho de perecer o de buscar el sustento recurriendo a medios violetos. La política asistencialista del Estado neoliberal no resuelve el problema social, pero sí contribuye a sus objetivos políticos: crear una base social de legitimación del modelo (un ejército de pedigüeños) y un cimiento electoral que respalda a los políticos y partidos neoliberales.

3. Dependencia tecnológica. La inversión extranjera no ha propiciado la transferencia tecnológica que la teoría convencional suponía. Al contrario, se ha apropiado de sectores económicos claves, desarticulando el aparato productivo y descarrilando la pretensión de generar procesos de innovación vinculados al desarrollo nacional. Más aún, los esfuerzos sociales de innovación están siendo subsumidos bajo la lógica de acumulación de las grandes corporaciones. La investigación científica de punta y los desarrollo de nuevas tecnologías están siendo apropiados por el sector corporativo, no obstante que sean universidades y centros de investigación públicos, financiados con recursos públicos, los que generen nuevos conocimientos. El sistema de patentes permite que el capital controle el trabajo científico-tecnológico. Éste es un dato relevante para entender cómo la innovación tecnológica en modo alguno constituye una fuerza del progreso social, sino más bien representa un recurso estratégico para la concentración de capital y la generación de ganancia extraordinaria.

4. Derechización política. La aparente democratización que acompaña al proceso de neoliberalización es un proceso de bajo perfil: se constriñe a los comicios electorales y aun estos permanecen en tela de duda, pues cuando ha existido la oportunidad de la alternancia electoral (1998 y 2006) vinculada a un cambio de modelo de desarrollo, entonces ha interferido el fantasma del fraude electoral. En cambio, la alternancia entre partidos de derecha afines al neoliberalismo ha ocurrido sin sobresaltos, pues en realidad se han cambiado las figuras formales del poder federal, no así la tecnocracia y su red de intereses, lo cual soporta los cimientos políticos del modelo. Para la derecha gobernante, el cambio político significa "un peligro para México". El neoliberalismo ha sido exitoso desde el punto de vista de sus objetivos políticos, pues ha fortalecido a un núcleo selecto de la élite social que concentra poder y riqueza a la sombra de la gestión del Estado, que canaliza recursos, activos e información para apuntalar su poder de clase, en lo que no está exenta la corrupción y complicidad. La coalición neoliberal de los partidos de centro-izquierda y centro-derecha con los poderes fácticos, reporta amplios beneficios para sus miembros, que les permite profundizar y ensanchar sus ámbitos de poder e impunidad. El poder no sirve a la gente, sino a los intereses de las élites sociales.

5. El Estado ha sido criticado acremente por los neoliberales al atribuirle ineficiencia, corrupción y burocratismo. En cambio, el sector empresarial privado se asume con los valores contrarios y en última instancia como el agente de desarrollo. Bajo la ideología de la llamada cultura emprendedora, se arguye que los empresarios son generadores de empresas y empleos, y en última instancia de bienestar social. No obstante, son los grandes monopo-

lios y oligopolios los verdaderos beneficiarios del sistema. Lo cual destruye empresas y fuentes de empleo, sin un verdadero compromiso social. Bajo esa tónica, la tecnocracia adopta los postulados de la nueva gerencia pública, que no sólo adapta criterios empresariales para el funcionamiento operativo del gobierno, sino que la gestión pública se vuelca para transferir recursos públicos al sector privado y para ofrecer toda clase de facilidades, salvaguardas y recursos para el gran capital. Asimismo, los recursos públicos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) incursionan, de manera creciente, en operaciones financieras especulativas, como la bursatilización, lo cual compromete el presupuesto público y la posible realización de obras y servicios públicos. La especulación con recursos públicos, la transferencias de recursos públicas al sector privado, el ejercicio de gobierno bajo preceptos de empresa privada y las políticas de ajuste estructural están orientadas a generar un "clima favorable a los negocios", en detrimento de la satisfacción de las necesidades sociales y de la promoción de un desarrollo humano generalizable.

6. El Estado neoliberal se asume como un "Estado mínimo" que debe ceder la iniciativa al sector privado empresarial para que detone el crecimiento, empleo y bienestar. Se supone que el Estado es un obstáculo al desarrollo, por ser corrupto, ineficiente y burocrático, por lo cual debe ceder las empresas bajo su dominio a los empresarios, quienes representan los valores contrarios. Sin embargo, en la realidad el Estado ha sido una comparsa de un sector privilegiado de políticos y empresarios para adjudicarse las empresas rentables, generar condiciones institucionales para la rentabilidad, recibir recursos públicos preferentes y control político de los sindicatos. Bajo esa estrategia se han fraguado fortunas inconmensurables, a tal punto que el neoliberalismo mexicano ha prohijado una exclusiva élite social que detenta las empresas más grandes del país. Además, ha apuntalado el poder económico y político de grandes empresas constituidas en etapas previas, como Televisa, Cemex y Bimbo. Asimismo, ha permitido la entrada de capitales extranjeros industriales, bancarios y comerciales para apoderarse de los sectores más rentables: WalMart, BBVA, Citigroup, Monsanto. También ha permitido que se privatice, de manera encubierta, empresas clave, como PEMEX. De este modo, se ha dicho que priva un capitalismo de compadres, un gobierno de corte oligárquico. En la práctica, más que un Estado mínimo, se trata de un Estado clasista que dirige apoyos selectivos a las élites sociales, en tal sentido, el proceso de neoliberalización se asume como el propósito de concentrar el poder político de la oligarquía nacional y extranjera.

7. La violencia, el crimen y la corrupción como saldos del neoliberalismo salvaje. Bajo la búsqueda compulsiva de la mayor riqueza posible, en el me-

nor tiempo posible, el narcotráfico emerge como una de las industrias más dinámicas prohijada por el neoliberalismo, pese a que formalmente no está permitida por el marco legal. No obstante, es sabido que para que funcione esta maquinaria de hacer dinero se requiere la complicidad de criminales, empresarios, policías, políticos y gobernantes. Una intrincada red de corrupción y una impresionante espiral de violencia y muerte acompañan a esta empresa capitalista. Las inconmensurables ganancias son destinadas a sectores económicos para su lavado: turismo, construcción, bienes-raíz, comercio, entre otros. El narcotráfico aparece como el signo de la muerte del subdesarrollo.

Estos ingredientes degradantes, entre muchos más, constituyen una verdadera señal de alarma. Hoy, más que nunca, es necesario impulsar un proyecto de desarrollo alternativo al neoliberalismo. No es una tarea exclusiva de los partidos políticos, pues estos atraviesan por una severa crisis de legitimidad, además de que han perdido vínculos con sectores de la sociedad, lo que pone en duda su función de representación popular. Todo parece indicar que es imprescindible construir un agente social colectivo que vaya más allá de las reivindicaciones de corto plazo, referidas a temáticas inmediatas o particulares, sino que es menester tener claridad sobre el momento en que vivimos, mediante diagnósticos críticos de la realidad social, para hilvanar estrategias de transformación social, cambio institucional y político, además de articular formas de organización y acción social. El neoliberalismo actúa desde arriba, desde la cúspide del poder, y difícilmente provendrán los cambios desde esa ubicación. Un proyecto de desarrollo nacional alternativo requiere rediseñar la inserción de México a la economía mundial, y no bajo la integración asimétrica y excluyente que caracteriza al TLCAN, el Plan Mérida y distintas formas de subordinación hacia Estados Unidos.

Bibliografía

AMADOR, D. (2010), "El crimen organizado, el único que ofrece alternativas a los jóvenes", *CNN,* México, 25 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.cnn.mx/nacional/2010/08/25/el-crimen-organizado-el-unico-que-ofrece-alternativas-a-los-jovenes

ARISTEGUI, C. (2010), *Maciel. Historia de un criminal*, México, Grijalbo.

Banco de México (BANXICO) (2009), *Informe anual*.

Banco Mundial (s/f), "Knowledge for development Program. Capacity Building for the Knowledge Economy". Disponible en: http://web.worldbank.

org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/0,,menuPK:46123~pagePK:64156143~piPK:64154155~theSitePK:461198,00.html

Bartra, A. (2006), "Milpas airadas: Hacia la autosuficiencia alimentaria y la soberanía laboral", en G. Otero (coord.), *México en transición: globalismo neoliberal, Estado y sociedad civil*, México, Miguel Ángel Porrúa, UAZ.

Blaikie, P. (1985), *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*, Londres y Nueva York, Longman.

Boltvinik, J. y Araceli Damian (2003), "Evolución y características de la pobreza en México", *Comercio Exterior*, vol. 53, núm. 6 (junio), pp. 519-531.

Bonfil-Batalla, G. (1989), *México profundo: una civilización negada*, México, Grijalbo.

Cano, A. (2010), "La Familia estableció un 'sistema de justicia paralelo': Cedemun", *La Jornada Michoacana*, 19 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2010/12/19/index.php?section=politica&article=003n1pol

Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2000), *Clasificación de localidades de México según grado de presencia indígena*. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2009), *Reporte CONEVAL cifras de pobreza por Ingresos 2008. Comunicado de Prensa núm. 006/09* (2003), México, CONEVAL.

Delgado, A. (2003), *El Yunque. La ultraderecha en el poder*, México, Plaza y Janés.

Diario Oficial de la Federación (DOF) (junio, 2009), "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología". Disponible en: http://dof.gob.mx/index.php?year=2009&month=06&day=12

Dussel, E. (2006), *20 tesis de política*, México, Siglo XXI.

Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ) (2005). Disponible en: http://www.redetis.org.ar/media/document/docdetrab.encuestanacionaldejuventud2005.institutomexicanodejuventud.pdf

Escobar, A. (1996), "Construction Nature: Elements for a Post Structuralist Political Ecology", *Futures*, vol. 28, núm. 4, pp. 325-343.

Esping-Andersen, G. (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton, Princeton University Press.

Etzkowitz, H. y L. Leydesdorff (2001), "The transformation of university-industry-government relations", *Electronic Journal of Sociology*, vol. 5, núm. 4, pp. 101-117.

Excélsior (2010), "Se sofistica el lavado de dinero en México", 11 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.vanguardia.com.mx/se_sofistica_el_lavado_de_dinero_en_mexico-592273.html

Forbes (2010), *List of world's billionaries*. Disponible en: http://www.forbes.com/lists/2010/10/billionaires-2010_The-Worlds-Billionaires_CountryOfCitizen_15.html

Forsyth, T. (2003), *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*, London and New York, Routledge.

Gil de San Vicente, I. (2005), *Del narcocapitalismo al narcoimperialismo*. Disponible en: www.rebelion.org/noticia.php?id=17305

González de la Rocha, M. (2006), "Los hogares en las evaluaciones: cinco años de investigación", en M. Gónzalez de la Rocha (coord.), *Procesos domésticos y vulnerabilidad. Perspectivas antropológicas de los hogares con Oportunidades*, México, La Casa Chata.

González-Licona, G. (2010), *Pobreza multidimensional y género en México*. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx

Granado, O. (2010) "Entre 65 y 70 por ciento de campañas políticas, infiltradas por crimen organizado: Buscaglia", *Milenio,* 10 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.milenio.com/node/543738

Guerrero, Omar (2004), *La nueva gerencia pública: neoliberalismo en administración pública,* México, Fontamara, 275 pp.

_____ (2003), *Gerencia pública en la globalización*, México, Porrúa.

Guttmann, Robert (2009), "Introducción al capitalismo conducido por la finanzas", *OlaFinanciera.com*, iiec-unam, enero-abril.

Harvey, D. (2007), *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal.

Hernández, A. *(2010), Los señores del narco,* México, Grijalbo.

Hernández Laos, E. y J. Velásquez Roa (2003), *Globalización, desigualdad y pobreza: lecciones de la experiencia mexicana*, México, uam-Plaza y Valdés.

Hernández-Navarro, L. y A. Aurélie Desmarais (2009), "Crisis y soberanía alimentaria: vía campesina y el tiempo de una idea", *El Cotidiano*, núm. 153, pp. 89-95. Disponible en: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/KFDLP/EXTUNIKAM/0,,menuPK:1414738~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:1414721,00.html

Guillén, H. (1997), *La contrarrevolución neoliberal*, México, Era.

Inglehart, R. (1977), *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics*, Princeton, The Princeton University Press.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) (2008), *II Conteo de población y vivienda 2005*, México, inegi. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/

_____ (2007), *Mujeres y hombres en México*, Aguascalientes, INEGI. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/

KNOWLEDGE ASSESSMENT METHODOLOGY (KAM) (s/f), en S. Levy (2008), *Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality and Economic Growth in Mexico*, Washington, Brookings Institution Press.

La Jornada (2010), "Secuestro de migrantes y extravíos oficiales", 26 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/12/28/index.php?section=edito

MÁRQUEZ, H. (2008), "México en vilo: desmantelamiento de la soberanía laboral y dependencia de las remesas", *Papeles de población*, vol. 14, núm. 58.

MARTÍNEZ, F. (2010), "Fijan el nuevo minisalario en $59.80 para el área A; se incrementa 4.1 por ciento", *La jornada,* 19 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/12/19/index.php?section=sociedad&article=037n1soc

MARTÍNEZ-ALIER, J. (1994), *De la economía ecológica al ecologismo popular*, 2a. ed., Barcelona, ICARIA.

_____ (2009), *El ecologismo de los pobres, veinte años después: India, México y Perú*, México, CEIICH-PUMA, UNAM. Disponible en: http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/90029

O'CONNOR, J. (2002), "¿Es posible el capitalismo sostenible?", en Héctor Alimonda (comp.), *Ecología, política, naturaleza, sociedad y utopía*, Buenos Aires, CLASCO.

PANAYOTOU, T. (1995), "Environmental Degradation at Different Stages", en Iftikhar Ahmed y Jacobus A. Doeleman (coords.), *Beyond Rio: The Environmental Crisis and Sustainable Livelihoods in the Third World*, New York, Macmillan Press.

RIOS, V. y Kevin Sabet (2008), *Evaluating the economic impact of drug traffic in Mexico*. Manuscrito disponible en: http://www.gov.harvard.edu/people/viridiana-rios-contreras

ROCHA, A. y R. López (2003), "Política en ciencia y tecnología en México: un análisis retrospectivo", en Jaime Aboites y Gabriela Dutrénit (coords.), *Innovación, aprendizaje y creación de capacidades tecnológicas*, México, Miguel Ángel Porrúa, pp. 103-132.

RUBIO, B. (2004), "La fase agroalimentaria global y sus repercusiones en el campo mexicano", *Comercio Exterior*, vol. 54, núm. 11.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2005), *El medio ambiente en México, 2005: en resumen*, México, SEMARNAT y PNUD.

TETREAULT, D. (2009), *Pobreza y degradación ambiental. Las luchas de abajo en dos comunidades del occidente de Jalisco: Ayotitlán y La Ciénega*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara.

VALENCIA-LOMELÍ, E. (coord.) (2010), *Perspectivas del universalismo en México*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara e ITESO.

_____, D. Foust y D. Tetreault (2010), *Informe final. Estudio sobre la implementación de las recomendaciones de los estudios referentes a la pobreza y su erradicación en las políticas públicas en México*, Universidad de Guadalajara, mimeo. [La versión final de este informe será publicada en 2011 por UINESCO, con informes similares sobre Argentina, Bolivia y Colombia.]

VILLAMIL, J. (2009), *Si yo fuera presidente*, México, Grijalbo.

WACKERNAGEL, M. y William R. (1996), *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*, Isla de Gabriola, Canadá, New Society Publishers.